

La consulta plantea si resulta de aplicación la normativa de protección de datos personales al tratamiento de datos realizado por un profesional autónomo al emitir las facturas solicitadas por sus clientes por los trabajos realizados.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al determinar su ámbito de aplicación señala en su artículo 2.1 que *“la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, añadiendo el artículo 3 a) que son datos de carácter personal *“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

Debe además tenerse aquí en cuenta que el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, establece en su artículo 2 la obligación de los empresarios o profesionales de expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad. El contenido de dichas facturas viene regulado en su artículo 6, entre cuyas menciones figuran datos personales tales como nombre y apellidos, domicilio y, en determinados casos, el número de identificación fiscal. Asimismo dicha norma impone unas obligaciones de conservación de copias y matrices de facturas y otros documentos durante el período establecido en la Ley General Tributaria.

Por tanto, si bien en principio, el tratamiento de los datos a que hace referencia dicho Reglamento relativos a los clientes del consultante que tengan la condición de personas físicas se encontraría sujeto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, toda vez que al presente caso no son aplicables ninguna de las exclusiones contenidas en el artículo 2.2. de dicha Ley Orgánica, es preciso analizar si nos encontramos ante un fichero a los efectos de lo que en ella se dispone, dado que de la consulta parece deducirse que los datos no se encuentran automatizados.

Debe recordarse así que el concepto de tratamiento de datos está en directa relación con el concepto de fichero, de forma que para hablar de tratamiento es precisa la existencia de fichero, en otro caso el tratamiento manual de datos personales quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Ley.

En este sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional que, en sentencia 16 de febrero de 2006, se refiere al tratamiento de datos personales, poniendo en relación este concepto con el de fichero, al que configura como un *prius* necesario para la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, razona, así, la sentencia: *“Pues bien, para que una actuación manual sobre datos personales (recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo...) tenga la consideración de “tratamiento de datos personales” sujeto al sistema de protección de la Ley Orgánica 15/1999 es necesario que dichos datos estén contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, esto es, en un conjunto estructurado u organizados de datos con arreglo a criterios determinados. Si no es así, el tratamiento manual de datos personales quedará fuera del ámbito de aplicación de la ley, no será un “tratamiento de datos personales” según el concepto normativo que la ley proporciona.*

*En realidad la existencia del “fichero” en el sentido legal es siempre precisa para que un tratamiento de datos personales esté sujeto al sistema de protección de la ley. En los casos de tratamiento automatizado de datos -siempre sometidos a la ley- es difícil imaginar la inexistencia de un fichero (aunque no se exija expresamente) puesto que los datos que se tratan mediante sistemas automatizados lo son siempre bajo unos criterios de estructura u organización previa”.*

Para determinar si nos encontramos ante un fichero debe acudirse en primer término a la definición de fichero contenida en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, conforme al cual constituye un fichero *“todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”*, permitiendo a los Estados que regulen los criterios que permitan determinar los elementos de un conjunto estructurado de datos y los distintos criterios que regulan el acceso a dicho conjunto de datos.

La Ley Orgánica 15/1999 al establecer el concepto de fichero en su artículo 3.b) configura a éste como *“todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”*, sin recoger distinción alguna entre ficheros manuales y ficheros automatizados.

No obstante, en lo relativo a ficheros manuales es preciso tener en cuenta el considerando 27 de la propia Directiva que reza lo siguiente: *“Considerando que la protección de las personas debe aplicarse tanto al tratamiento automático de datos como a su tratamiento manual; que el alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las técnicas utilizadas,*

*pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante, por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva sólo abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están estructuradas; que, en particular, el contenido de un fichero debe estructurarse conforme a criterios específicos relativos a las personas, que permitan acceder fácilmente a los datos personales; que, de conformidad con la definición que recoge la letra c) del artículo 2, los distintos criterios que permiten determinar los elementos de un conjunto estructurado de datos de carácter personal y los distintos criterios que regulan el acceso a dicho conjunto de datos pueden ser definidos por cada Estado miembro; que, las carpetas y conjuntos de carpetas, así como sus portadas, que no estén estructuradas conforme a criterios específicos no están comprendidas en ningún caso en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.”*

Consecuentemente con lo previsto en la Directiva, el criterio seguido por esta Agencia para dilucidar si nos encontramos ante un fichero manual o no automatizado y, por ello, sujeto a las previsiones de la normativa de protección de datos, parte de la necesidad de que los datos sean objeto de una organización sistemática, con arreglo a criterios que permitan la búsqueda de los mismos a partir de los datos personales de una determinada persona, de manera que en otro caso no se consideraría fichero a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha aportado, a efectos de clarificación del ámbito objetivo de dicha Ley Orgánica un concepto de fichero no automatizado. Nos encontramos así en su artículo 5.1 letras k) y n) ante las siguientes definiciones:

*“Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.”*

*“Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.”*

Por consiguiente, y en lo que al presente supuesto se refiere, siendo la existencia de un fichero consustancial al régimen de protección de datos, en la medida en que el conjunto de facturas, copias o matrices de facturas, o en su caso, de otros documentos a los que se refiere el anteriormente citado Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, no constituyan un archivo estructurado por no encontrarse ordenadas con arreglo a



criterios determinados relativos a las personas, tampoco su tratamiento estaría sujeto a la Ley Orgánica 15/1999. Por el contrario, si dicha condición no se cumple o se trata de un archivo automatizado la citada Ley Orgánica sería de plena aplicación al presente caso.